

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

S/CSC/M/34

11 de noviembre de 2004

(04-4796)

---

## Comité de Compromisos Específicos

### INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004

#### Nota de la Secretaría<sup>1</sup>

1. El Comité de Compromisos Específicos (CCE) celebró una reunión el 28 de septiembre de 2004. El orden del día de la reunión figura en el aerograma WTO/AIR/2387. Dado que no se planteó ninguna cuestión en el marco del punto Otros asuntos, el orden del día fue adoptado en la forma propuesta en el aerograma.

#### A. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACIÓN

2. El Presidente dijo que deseaba estructurar el punto relativo a las cuestiones relacionadas con la clasificación en cuatro partes: en primer lugar, el representante de la OCDE haría una presentación sobre los servicios jurídicos; en segundo lugar, el Comité reanudaría el debate sobre la propuesta de Indonesia relativa a la clasificación de los servicios de energía; en tercer lugar, él invitaría a los Miembros a que formularan observaciones sobre cualquier otra cuestión relacionada con la clasificación; y, por último, sugeriría que el Comité debatiera de modo informal cuestiones relativas a la clasificación en dos esferas de los servicios prestados a las empresas, a saber, los servicios de consultores en administración y los servicios de informática y servicios conexos.

3. Recordó que el Comité había considerado la posibilidad de invitar a la OCDE a la presente reunión para que presentara el documento titulado "*Gestión de las negociaciones basadas en peticiones y ofertas en el marco del AGCS: el caso de los servicios jurídicos*" (JOB(04)/77), pero que en la última reunión no había llegado a una conclusión sobre el foro más adecuado para realizar dicha presentación. Tras celebrar consultas informales, el Presidente había informado a las delegaciones por fax de que al parecer se prefería debatir el documento en ese Comité. Aunque la presentación se incluyó en el punto relativo a las cuestiones relacionadas con la clasificación, abarcaría la totalidad del documento y no sólo los aspectos relacionados con la clasificación.

4. El representante de la OCDE explicó que el estudio sobre los servicios jurídicos formaba parte de un proyecto conjunto de la OCDE/UNCTAD, que tenía por objeto ayudar a los Miembros de la OMC a celebrar negociaciones basadas en peticiones y ofertas tratando de aclarar algunas de las complejas cuestiones planteadas. El proyecto abarcaba cinco sectores, a saber, los servicios de energía y construcción (UNCTAD), y los servicios de seguros, jurídicos y ambientales (OCDE).

5. En relación con el tema de su presentación, dijo que el sector jurídico había registrado un crecimiento continuo en el pasado decenio como resultado de la expansión del comercio global, así como del desarrollo de nuevos campos del derecho, en particular, en las esferas del derecho de sociedades y del derecho mercantil. El sector había experimentado una importante consolidación, que había llevado a un aumento del número de empresas multinacionales de servicios jurídicos. Aunque

---

<sup>1</sup> El presente documento ha sido elaborado bajo la propia responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

en la actualidad estas empresas se encontraban principalmente en algunos países anglófonos, también se observaba un fuerte crecimiento de grandes empresas en otros países de Europa y Asia. Naturalmente, los abogados particulares que trabajaban para grandes empresas multinacionales de servicios jurídicos eran nacionales de muchos países diferentes. Un ejemplo al caso era el de Baker & McKenzie que, en cuanto segunda empresa de servicios jurídicos más grande del mundo, daba empleo a nacionales de 60 países. Sin embargo, se disponía de pocos datos detallados sobre las nacionalidades de los abogados. El comercio de servicios jurídicos parecía haber crecido a un ritmo mayor que el sector en general. Los modos 3 y 4 estaban adquiriendo cada vez más importancia para las empresas de servicios jurídicos, dado que sus clientes pedían asesoramiento multijurisdiccional y un servicio integrado que abarcara todos los aspectos de una transacción. Para satisfacer esa demanda, los abogados trataban a menudo de establecer sus propias redes internacionales mediante una presencia comercial, con el objetivo de crear un equipo de abogados que tuvieran conocimientos de una multitud de países, incluidos los países anfitriones, y de las prácticas que interesaban a las empresas de sus clientes. No obstante, el comercio de servicios jurídicos siguió viéndose afectado por diversas medidas, especialmente en los modos 3 y 4.

6. Los Miembros habían presentado varias propuestas, más o menos ambiciosas, para mejorar la clasificación actual del AGCS. Una de ellas consistía en elaborar una definición común de consultores jurídicos extranjeros, entendiéndose por ello los abogados profesionales que no deseaban ejercer el derecho del país anfitrión, y elaborar una definición común de derecho internacional. Otra propuesta era la de incluir subsectores centrados en profesiones diferentes, por ejemplo, abogados y jueces; la representación jurídica como asesoramiento en transacciones empresariales; la participación en la dirección de empresas, la mediación, el arbitraje y la defensa pública de intereses y la promoción de intereses de grupos. Más recientemente, se había propuesto añadir 12 subcategorías basadas en la disciplina jurídica y el tipo de servicio, haciendo una distinción entre los servicios jurídicos de consultoría y de representación en el país anfitrión, en el país de origen, en un tercer país, y el derecho internacional. Varios Miembros de la OMC habían hecho distinciones similares en los compromisos que asumieron en la Ronda Uruguay. Otra propuesta era la de dejar la clasificación actual sin cambios y ocuparse de cualquier limitación en las columnas relativas al acceso a los mercados y el trato nacional.

7. Un examen general de los compromisos existentes reveló que 45 Miembros (contando las Comunidades Europeas y sus Estados miembros como uno) habían contraído compromisos durante la Ronda Uruguay, además de 19 de los 20 Miembros que se habían adherido a la OMC con posterioridad. Durante las etapas anteriores de las actuales negociaciones, tres Miembros habían presentado propuestas sobre los servicios jurídicos, junto con cuatro que habían formulado propuestas sobre los servicios profesionales en general. En tres ofertas iniciales se proponían nuevos compromisos en este sector, mientras que en 11 ofertas se preveían cambios de los compromisos existentes. Los cambios propuestos incluían la eliminación de las limitaciones al acceso a los mercados y al trato nacional, como las prescripciones en materia de nacionalidad y residencia, o la ampliación del alcance de los compromisos de modo que incluyeran más que los servicios jurídicos ya objeto de compromiso.

8. El estudio de la OCDE mostró que los beneficios de la liberalización del comercio de servicios jurídicos no eran insignificantes. El apoyo de los abogados a las transacciones empresariales era fundamental y, sin su contribución, el comercio no podría desarrollarse de manera segura y previsible. Por ello, se consideraba cada vez más que los servicios jurídicos formaban parte de la infraestructura general del comercio. La liberalización del comercio podía aumentar la competencia en el mercado nacional, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios jurídicos y a reducir los precios de estos servicios para los consumidores. Dado que la mayoría de los usuarios de servicios jurídicos extranjeros eran empresas, la existencia de un entorno seguro y previsible para los servicios jurídicos podía ayudar a atraer inversiones y proporcionar oportunidades comerciales en el mercado local; la presencia de extranjeros mediante asociaciones con abogados locales y la contratación de

abogados locales podía ayudar a transferir conocimientos y pericia, lo cual contribuiría a su vez al desarrollo de una rama de producción nacional más fuerte y podría conducir al desarrollo de la capacidad de exportación en este sector. Además, la liberalización del comercio de servicios podría reportar beneficios no económicos, como el conocimiento de la administración de justicia en otros países.

9. La consideración más importante en que se basaban muchas de las restricciones al comercio de servicios jurídicos parecía ser la protección de la función pública de los abogados. Por lo tanto, algunas limitaciones pertinentes tenían por objeto garantizar que los servicios jurídicos se prestaran con los conocimientos necesarios de las normas y condiciones locales, como era el caso de las prescripciones en materia de nacionalidad y residencia. La negativa a que los abogados extranjeros pudieran ejercer su profesión en el país y la prohibición de que los nacionales se asociaran a esos abogados no reconocidos tenía por objeto proteger a los consumidores y garantizar la calidad del servicio. Otra consideración normativa era la de garantizar la rendición de cuentas y la responsabilidad de los abogados frente a sus clientes, para lo que se establecían prescripciones relativas a la forma jurídica y la residencia. Por último, estaba la consideración de garantizar la proximidad y disponibilidad de abogados mediante las prescripciones en materia de residencia.

10. La importancia de proteger el interés público era manifiesta, dado el papel crucial que desempeñan los abogados, a saber, su contribución a la administración de justicia. En la labor de reforma había que tomar en cuenta el papel legítimo de los gobiernos para lograr los objetivos de política pública. Sin embargo, la cuestión era determinar hasta qué punto la medida aplicada perseguía necesariamente esos objetivos, o si éstos podían lograrse de igual o mejor forma con medios menos restrictivos del comercio. En este sentido, los motivos a que obedecían los requisitos de nacionalidad no estaban claros: si un extranjero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para adquirir o demostrar los conocimientos exigidos del país en cuestión, parecía que se proporcionaba el mismo grado de protección a los consumidores. En el caso de las prescripciones en materia de residencia, aunque eran más razonables a los efectos de proteger a los consumidores, se podrían seguir otros criterios. La demanda de servicios jurídicos provenía sobre todo de las empresas, que podían muy bien protegerse eficazmente mediante acuerdos contractuales privados, que incluían disposiciones sobre seguros, indemnización y solución de diferencias. Permitir la formación de asociaciones y la contratación de abogados locales parecía comportar pocos riesgos para los consumidores, siempre que los abogados locales proporcionaran todo el asesoramiento sobre el derecho del país en nombre de las empresas extranjeras. En realidad, dichas restricciones podrían perfectamente traducirse en oportunidades fallidas para los abogados locales sin que se produjera ninguna transferencia de conocimientos y pericia a la rama de producción nacional. Al parecer, también era necesaria una regulación más centrada. Por ejemplo, las preocupaciones por garantizar el conocimiento de las normas locales parecían estar mejor atendidas con un proceso equitativo y transparente de cualificación y el derecho a ejercer la profesión jurídica en el país anfitrión sobre la base de los conocimientos y la capacidad, más que con los requisitos de nacionalidad. La protección de los consumidores y la necesidad de proximidad podían lograrse con medios menos restrictivos del comercio que las prescripciones de residencia, por ejemplo, mediante la colaboración con el personal local, los requisitos de fianza o las disposiciones relativas a los seguros. Las preocupaciones de que la constitución en sociedad pudiese implicar una merma de la responsabilidad profesional podían abordarse mediante asociaciones que preservaran la plena responsabilidad de los abogados hacia los clientes de una empresa. Una medida adicional consistiría en establecer marcos que ayudaran a crear una capacidad nacional, por ejemplo, promoviendo la transferencia de conocimientos y pericia, y exigiendo la colaboración con los abogados locales.

11. Algunos países percibían la liberalización de los servicios jurídicos como una amenaza a su rama de producción nacional. Aunque la liberalización del comercio de mercancías y servicios raramente carecía de consecuencias en la distribución, era importante tener presente que los beneficios que acaban de esbozarse compensarían los costos. Una característica peculiar del sector

era la de que la repercusión de la presencia extranjera en los proveedores locales fuese probablemente menos significativa que en otros sectores: en primer lugar, los abogados locales mantenían una ventaja competitiva en la práctica del derecho de su país y, en segundo lugar, las empresas extranjeras solían contratar a abogados locales para introducirse en este campo del derecho. Aunque la liberalización de los servicios jurídicos reportaría posiblemente beneficios significativos, tenía que realizarse de manera progresiva, ordenada y transparente para que los gobiernos pudieran establecer un marco normativo adecuado y las partes afectadas se prepararan para una mayor competencia. El AGCS era un instrumento bien adaptado para conseguir estos objetivos, ya que proporcionaba a los Miembros gran libertad para elegir los términos de la liberalización. En las negociaciones actuales los Miembros podían excluir partes del sector, por ejemplo, el derecho del país anfitrión, o un subsector, por ejemplo, la representación. En este sentido, algunos Miembros habían defendido la idea de otorgar una licencia limitada a los consultores jurídicos extranjeros, lo cual significaba que éstos no tenían que revalidar sus títulos para ejercer el derecho del país anfitrión, pero podían obtener una licencia limitada para ejercer en el ámbito del derecho para el que estuvieran cualificados. A esto se podía añadir la posibilidad de asociarse con abogados locales y contratarlos. Por ello, las empresas de servicios jurídicos podían satisfacer las peticiones de sus clientes para que se les prestase un servicio integrado que abarcase todos los aspectos de una transacción.

12. Se había propuesto también que se contrajesen compromisos relativos a todos los servicios jurídicos, partiendo de la base de que el ejercicio del derecho del país anfitrión estaría reservado a los abogados cualificados en el plano local. Los Miembros podían igualmente limitar el acceso a los proveedores extranjeros y discriminar contra ellos, pero se debería proceder con cautela para crear un marco normativo adecuado que siguiera logrando eficientemente los objetivos de política pública. Los países en desarrollo podían asimismo especificar limitaciones para reforzar su capacidad nacional, por ejemplo, mediante la transferencia de conocimientos y pericia. Los artículos IV y XIX otorgaban esta flexibilidad adicional. En estos casos, se debería proceder con cautela para no aplicar políticas excesivamente onerosas, que podrían desalentar el comercio y la inversión y, por ende, el desarrollo de una rama de producción nacional fuerte. Los países también podían precomprometerse a una mayor liberalización a fin de proporcionar a la rama de producción local tiempo para ajustarse. Por último, podían aplicar cualquier medida no discriminatoria al objeto de especificar los requisitos exigidos para ejercer el derecho del país anfitrión sin necesidad de consignarla en listas, incluso aunque podría ser útil consignar esas medidas en listas con arreglo al artículo XVIII.

13. Una cuestión clave para muchos países en desarrollo que determinaba la naturaleza y el ritmo de la liberalización, era la falta de capacidad normativa. Por lo tanto, la asistencia técnica y la creación de capacidad constituían una dimensión importante de las negociaciones en el marco del AGCS. En conclusión, dijo que las cuestiones planteadas en el anexo 1 del documento podrían resultar útiles cuando los Miembros realizaran peticiones y ofertas con sus interlocutores comerciales. Las cuestiones estaban divididas en cuestiones relacionadas con el AGCS y cuestiones no relacionadas con el AGCS.

14. El representante del Canadá señaló que los servicios jurídicos eran un sector prioritario para el Canadá en el contexto de las negociaciones en curso en la OMC. Las empresas de servicios jurídicos habían adoptado una orientación más internacional en los últimos años a fin de atender las crecientes necesidades globales de sus clientes. El documento de la OCDE era útil para los negociadores del AGCS, en particular, las cuestiones planteadas en el anexo 1, que los Miembros quizá desearan tener en cuenta en el contexto del proceso de peticiones y ofertas. Recabó más información sobre esas cuestiones.

15. El representante de la República de Corea consideró que el documento de la OCDE podía ser muy útil para muchos Miembros. Los beneficios y la dirección de la liberalización en el sector jurídico reflejaban las características de las transacciones relativas a los servicios jurídicos internacionales. No obstante, indicó varios puntos que preocupaban a los Miembros, para los que su

delegación pediría un examen adicional. En particular, se trataba de la declaración contenida en el documento de la OCDE, de que las prescripciones en materia de residencia y nacionalidad consignadas en listas por varios Miembros podían considerarse más restrictivas del comercio de lo necesario para alcanzar el objetivo previsto.

16. Hasta cierto punto, se podía considerar que los requisitos de nacionalidad surtían un efecto restrictivo en el comercio, dado que no era fácil estimarlos necesarios para garantizar un nivel sustancial de capacidad o conocimientos. No obstante, su delegación creía que era del todo preciso exigir determinados períodos de residencia para lograr los objetivos de política pública, como la protección de los consumidores, incluso a la luz de la evolución reciente de la tecnología de la información. Esto era especialmente cierto en países cuyos mercados jurídicos estaban siendo abiertos por primera vez, y donde la reputación y credibilidad de los abogados o empresas de servicios jurídicos extranjeros no estaban reconocidas. La participación de los abogados extranjeros que no residieran en el país sería por lo tanto perjudicial para la protección de los consumidores. Por motivos de interés público, Corea aplicaba también medidas similares a los abogados nacionales, excluyendo la prestación de servicios jurídicos en ausencia de abogado mediante la prohibición de establecer múltiples sucursales en distintas regiones, excepto las de empresas de servicios jurídicos. Todas las alternativas a los requisitos de residencia mencionadas en el documento de la OCDE, a saber, los seguros, la solución de diferencias y la indemnización, eran medidas *ex post*, y por lo tanto no podían sustituirse a este requisito previo para lograr los objetivos de política pública.

17. En el documento de la OCDE se hacía hincapié en que la apertura de mercados a los servicios jurídicos reportaría beneficios tales como la mejora de la calidad de los servicios jurídicos disponibles, la reducción de los derechos cobrados por los servicios jurídicos y el fomento de la inversión extranjera. Éstos eran los argumentos habituales defendidos por los países partidarios de la apertura de los mercados. No obstante, se requerían pruebas concretas del impacto de la liberalización. En el documento se citaba un estudio cuantitativo realizado por Nguyen-Hong sobre los costos de las restricciones (recuadro 1) que a su juicio no era convincente, dado que no había un paralelismo demostrado entre el impacto de las restricciones sobre los costos de los servicios de ingeniería y los de los servicios jurídicos. Además, del contenido del recuadro 1 no estaba claro qué método econométrico se había adoptado en el estudio. Dudaba de si proporcionaba motivos suficientes para concluir que las restricciones estaban aumentando sustancialmente el costo y precio de la prestación de servicios jurídicos. Muchos de los beneficios derivados de un mayor acceso a los mercados sólo se materializarían con el tiempo, como se afirmaba en el párrafo 50 del documento. Éste era un factor importante que no se podía pasar por alto. Aún no había respuestas a algunas preguntas críticas, incluida la relativa al costo inicial de la liberalización del mercado de los servicios jurídicos, y se preguntaba cuánto tiempo pasaría hasta que los beneficios superaran los costos de la apertura de mercados. Era fundamental proceder a un análisis objetivo basado en casos reales. Algunos países habían visto que los efectos perjudiciales de la apertura de mercados, como la subida de los precios al consumidor para cubrir el costo de establecimiento de una asociación, superaban de hecho los beneficios que cabía esperar, por ejemplo, de la expansión de la inversión extranjera directa. En consecuencia, su delegación consideraba que era indispensable un período de transición para que los países se ajustaran a los cambios provocados por la liberalización. Además, la liberalización se tenía que realizar de manera progresiva a fin de aumentar al máximo los resultados beneficiosos. Pese a las considerables dificultades para convencer a las partes nacionales interesadas de las necesidades de la liberalización, Corea había presentado una oferta inicial sobre la apertura de su mercado de servicios jurídicos por primera vez y estaba realizando denodados esfuerzos para abrir su mercado gradualmente sobre la base de esa propuesta.

18. Para terminar, afirmó que el informe de la OCDE proporcionaba sin duda alguna material útil para la mayoría de los Miembros, incluida Corea, con respecto a las negociaciones de servicios jurídicos. No obstante, dado que el informe parecía centrarse solamente en el aspecto positivo de la

apertura de mercados, sugirió que se realizaran más esfuerzos para identificar y minimizar los efectos perjudiciales basándose en análisis empíricos rigurosos.

19. El representante del Taipei Chino convino con muchos elementos de las presentaciones de la OCDE, como los efectos favorecedores del crecimiento que tiene el comercio de servicios jurídicos y la creciente importancia de los modos 3 y 4. En cuanto a las prescripciones en materia de nacionalidad, el Taipei Chino no prohibía a los extranjeros participar en exámenes que habilitaban a los candidatos para ejercer la abogacía. Estaba de acuerdo en que no existía una relación forzosa entre la nacionalidad de un abogado y la calidad del servicio prestado. La calidad de los servicios jurídicos estaba relacionada con la formación jurídica del abogado, acreditada por los exámenes, y la experiencia, pero no con el período de residencia en el país anfitrión. Por consiguiente, el Taipei Chino pedía a los Miembros que eliminaran las prescripciones en materia de residencia en las negociaciones en curso. Con respecto a las cuestiones relativas a la reglamentación nacional, consideraba que las disciplinas sobre la reglamentación nacional en el sector de la contabilidad no constituían un modelo adecuado para los servicios jurídicos. A diferencia de éstos, los servicios de contabilidad habían sido desde hace tiempo internacionalizados como resultado del esfuerzo de la Federación Internacional de Contables (FIC) y su Comité Internacional de Normas de Contabilidad (CINC). En comparación, los servicios jurídicos formaban parte de un sistema judicial nacional que, a su vez, era reflejo de tradiciones jurídicas, económicas y culturales.

20. Señaló que los Miembros habían utilizado distintos métodos de consignación en listas para contraer compromisos relativos a los consultores jurídicos extranjeros. El Taipei Chino creía que el método de subdividir los servicios jurídicos e inscribir los compromisos relativos a los consultores en la columna de sectores era el más apropiado. En respuesta al llamamiento a la transparencia hecho por la OCDE, dijo que el Taipei Chino había publicado en el sitio Web del Ministerio de Justicia las disposiciones de la Ley sobre el ejercicio de la profesión de abogado. El sitio Web también permitía a los abogados extranjeros formular preguntas.

21. Refiriéndose a la clasificación, apoyó la propuesta australiana que, a su juicio, era útil para la sistematización de los temas relacionados con la clasificación de los servicios jurídicos. La clasificación detallada propuesta por Australia reflejaba la forma real de las transacciones relativas a los servicios jurídicos y también la regulación en cada Miembro. En este sentido, la clasificación contribuiría a que las negociaciones fueran más eficientes y otorgaría más flexibilidad a los distintos Miembros.

22. En respuesta a las observaciones formuladas, el representante de la OCDE declaró que las medidas consideradas en el anexo 1 habían sido divididas por modos de suministro y el hecho de si se referían a sectores específicos o estaban relacionadas con medidas horizontales. También se incluían medidas que guardaban una relación más estrecha con las negociaciones sobre la reglamentación nacional. Varias de estas últimas medidas podían ser un obstáculo al comercio, especialmente en una profesión como la de los servicios jurídicos. Se habían incluido asimismo cuestiones no abarcadas por el AGCS. Con respecto a las observaciones de Corea sobre las prescripciones en materia de residencia, dijo que el documento dejaba a salvo los derechos de los países a aplicar medidas que se adaptaran a sus situaciones particulares. El documento proponía varias opciones menos restrictivas del comercio que se podían utilizar con carácter alternativo, o en una etapa posterior. En cuanto a la observación de que se necesitaban pruebas más rigurosas de los beneficios de la liberalización, indicó que, en general, las investigaciones actuales eran de naturaleza preliminar. El estudio citado en el documento utilizaba un índice de restrictividad que clasificaba distintas medidas aplicadas en países diferentes para las profesiones de abogado, contable, ingeniero y arquitecto. Sobre la base de este índice, se aplicaba una técnica econométrica para calcular el margen entre el precio y el costo. Esto se hacía solamente con la profesión de ingeniero. No obstante, dado que el índice de restrictividad para la profesión jurídica era uno de los más elevados, era razonable suponer que se registrarían efectos similares en esa profesión, en la que se habían observado subidas de precios de hasta el 15 por

ciento en algunos casos. Recordó que en el documento también se mencionaban posibles desventajas de la liberalización y sugirió un enfoque gradual en determinados casos, haciendo hincapié en que la estructura del AGCS era adecuada para proceder a una liberalización progresiva.

23. El representante de Australia reiteró la opinión de su delegación de que el concepto de licencias limitadas era un medio eficaz de hacer avanzar la liberalización de los servicios jurídicos. Esperaba que se pudiese llegar a un entendimiento común de las cuestiones relacionadas con la clasificación entre los Miembros del grupo informal de amigos. La contribución de la OCDE sería de gran ayuda en ese contexto.

24. El representante de Singapur dijo que cualquier clasificación utilizada en la ronda actual debería ser un instrumento que facilitara la consignación de los compromisos en listas, sin convertirse en un desincentivo u obstáculo en sí. Apoyó la propuesta de clasificación de Australia, que estructuraba los servicios jurídicos con arreglo a la jurisdicción (derecho del país de origen, derecho del país anfitrión, derecho de un tercer país, derecho internacional) y el tipo de servicio, a saber, representación y consultoría. Durante la Ronda Uruguay, gran número de Miembros había contraído compromisos con arreglo a las distinciones basadas en la jurisdicción y el tipo de derecho.

25. El representante de Suiza destacó la función infraestructural que desempeñaban los servicios jurídicos al contribuir a la eficiencia económica general. Estaba de acuerdo en que había una demanda creciente de servicios de asesoramiento multijurisdiccional y de servicios jurídicos integrados. Le interesaban las opiniones del representante de la OCDE sobre la relación entre la demanda creciente de servicios de asesoramiento multijurisdiccional y servicios integrados, por una parte, y un número más elevado de subcategorías en la columna del sector, por otra. A su juicio, la introducción de cambios en la clasificación y la creación de nuevas subcategorías no eran necesariamente útiles en este sentido. El AGCS proporcionaba suficiente flexibilidad para realizar ofertas significativas.

26. La representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación consideraba que el anexo 1 incluía cuestiones útiles, incluso con una aplicación más amplia que trascendía los servicios jurídicos. Nueva Zelandia había extraído conclusiones similares a las enunciadas en el documento de la OCDE sobre los beneficios de la liberalización de los servicios jurídicos. Haciendo observar el elevado número de abogados pertenecientes a distintos sistemas de derechos que trabajaban para grandes empresas de servicios jurídicos, se preguntó si estos abogados estarían habilitados para ejercer su profesión en su propio país, de modo que pudieran prestar servicios de representación, o si solamente se dedicaban a los servicios de consultoría.

27. La representante de los Estados Unidos dijo que el documento de la OCDE proporcionaba información útil sobre la naturaleza de los obstáculos al comercio de servicios jurídicos y sobre los posibles beneficios de la liberalización. El documento podía ser una útil referencia para las propuestas de negociación y las cuestiones relacionadas con la clasificación a lo largo de las negociaciones. Su delegación había encontrado especialmente interesante el anexo 4, en el que se enumeraban los compromisos de la Ronda Uruguay relativos a los servicios jurídicos con arreglo al derecho del país de origen, el derecho del país anfitrión y el derecho internacional. Aunque era difícil extraer conclusiones de un análisis que solamente tomaba en cuenta el alcance, pero no el fondo de los compromisos, en el cuadro se señalaba una forma de considerar su equilibrio global. Además, el cuadro podía resultar útil para evaluar los méritos relativos de la terminología propuesta por Australia y la Resolución de la IBA.

28. El representante del Brasil acogió con satisfacción el documento de la OCDE como aportación útil a las negociaciones, puesto que contenía un resumen muy bueno de lo que había sucedido en el pasado, y establecía algunas diferencias entre los "demandantes" de servicios jurídicos. Con referencia al párrafo 69, le complacía que en el documento se indicara que un número

considerable de Miembros no estaba a favor de las prescripciones en materia de consulta previa. La lista de cuestiones del anexo 1 contenía elementos interesantes para los países en desarrollo, en particular sobre si deberían contraerse compromisos relativos a los servicios jurídicos. Solicitó más información sobre el anexo 2, en particular sobre la columna correspondiente a los "abogados fuera del país de origen". ¿Qué porcentaje de estos abogados eran ciudadanos del país donde la empresa de servicios jurídicos había establecido una oficina, y cuántos estaban establecidos en países desarrollados y en desarrollo?

29. En respuesta a la pregunta formulada por Suiza, el representante de la OCDE señaló que las empresas trataban de satisfacer la demanda de asesoramiento multijurisdiccional mediante la contratación de abogados cualificados en distintas jurisdicciones o la asociación con ellos. Por lo tanto las restricciones a la formación de asociaciones y la contratación de abogados locales constituían a menudo problemas fundamentales. Con respecto a la pregunta de Nueva Zelanda, aunque no estaba muy familiarizado con las prácticas reales de las empresas, pensaba que los abogados a los que se permitía prestar servicios de representación se verían normalmente en desventaja por el hecho de trabajar para una empresa de servicios jurídicos extranjera. En relación con la pregunta formulada por el Brasil, lamentaba que no se dispusiera de datos suficientemente desglosados para responder a ella.

30. La representante de los Estados Unidos dijo que su delegación había presentado una propuesta de disciplinas a fin de avanzar en las negociaciones en el Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional. La propuesta se basaba en la idea, ya recogida en las disciplinas de contabilidad, de las consultas y observaciones previas. Esa propuesta se estaba todavía examinando y esperaba que el Grupo de Trabajo pudiera debatir la manera de contraer el compromiso de formular observaciones previas sin una cláusula del máximo empeño, y de abordar las preocupaciones relativas a la carga administrativa y hacer frente a las limitaciones técnicas y de capacidad.

31. El Presidente expresó su agradecimiento al representante de la OCDE por la presentación. Recordó el debate mantenido en la reunión de junio sobre la Resolución de la IBA en apoyo de un sistema de terminología para los servicios jurídicos (JOB(04)/17). La Secretaría había recibido desde entonces una carta de la IBA, que trataba sobre la finalidad de la Resolución, cuestión que el Comité había debatido en la última reunión. Propuso que la carta se distribuyera como documento de sala para más información.

32. Así quedó acordado.

33. El representante de Australia recordó que todavía no se había dado respuesta a varias preguntas relativas a la Resolución de la Asociación Internacional de Abogados (IBA). Sugirió que la IBA fuese invitada a la próxima reunión del CCE a fin de que proporcionara aclaraciones. Las delegaciones del Japón y Suiza apoyaron la propuesta.

34. El Presidente propuso que el Comité invitara a la IBA a que respondiera las preguntas formuladas por los Miembros sobre su Resolución.

35. Así quedó acordado.

36. Con respecto a otras cuestiones relacionadas con la clasificación, el Presidente recordó que el Comité había debatido la propuesta de Indonesia relativa a la clasificación de los servicios de energía (S/CSC/W/42) en las últimas tres reuniones. En esas reuniones, las delegaciones habían hecho observaciones sobre el fondo de la propuesta y formulado preguntas a la delegación de Indonesia.

37. El representante de Indonesia informó a las delegaciones de que su delegación estaba revisando su propuesta, tomando en cuenta las observaciones y sugerencias formuladas durante las reuniones del CCE de diciembre de 2003 y marzo y junio de 2004. La propuesta revisada sería



distribuida antes de la siguiente reunión. En relación con una pregunta formulada por Kuwait en la última reunión, dijo que en la propuesta revisada se habían desglosado los servicios de energía basándose en la secuencia de las actividades relacionadas con la energía. Se había incluido ahora el estudio de gravedad como una nueva sección 1A.1.4.2, el estudio magnético como 1A.1.4.3, y la interpretación de datos sísmicos como 1A.1.4.1.3. También dio las gracias a la delegación de China por haber presentado una lista de preguntas. Lamentablemente, debido a limitaciones de tiempo, su delegación no podía responder a las preguntas de China en la presente reunión.

38. El representante del Japón recordó que su delegación, junto con la de Chile y los Estados Unidos, había propuesto una "Guía para la consignación en listas de los compromisos sobre servicios de energía en la OMC" (JOB(03)/89), que abordaba algunas cuestiones de manera distinta al documento de Indonesia. Haciendo referencia a la página 9 del documento de Indonesia (sección 2.7.1), indicó que en el documento W/120, la clave CPC 7131 se limitaba al transporte por tuberías y que la entrada correspondiente a la sección 2.7.1 probablemente debería ceñirse a ese sector. El transporte de carbón, clasificado en la sección 2.7.3, sería mejor incluirlo en otras entradas relativas a la distribución o el transporte. En cuanto a la sección 2.7.4, en el documento de Indonesia se decía que la transmisión y distribución de electricidad estaban incluidas en los servicios relacionados con la distribución de energía. Su delegación entendía que esto no formaba parte de la clave CPC 887, y que se necesitaría una entrada distinta. Su delegación también creía que podían resultar necesarias distintas entradas para las secciones 3.1.2 (servicios comerciales al por mayor de electricidad, gas urbano, vapor y agua caliente) y 3.2.2 (servicios de venta al por menor de electricidad, gas urbano, vapor y agua caliente). Con respecto a la sección 2.2.2 (liquefacción y regasificación), consideraba que abarcaba las actividades manufactureras.

39. El Presidente concluyó que el Comité esperaba la revisión de la propuesta de Indonesia para debatirla en la siguiente reunión. Recordó que había habido un amplio acuerdo en que al pasar a un debate informal para examinar las cuestiones relacionadas con la clasificación se facilitaría un intercambio de opiniones más abierto. Sobre la base de las aportaciones hechas por las delegaciones interesadas, sugirió examinar en el modo informal: los servicios de consultores y los servicios de informática y servicios conexos. Tenía la intención de preparar un breve resumen de los debates, de carácter genérico, que se distribuiría bajo su propia responsabilidad como documento de trabajo, sin ninguna signatura.

40. Así quedó acordado.

#### B. CUESTIONES RELATIVAS A LA CONSIGNACIÓN EN LISTAS

41. El Presidente indicó que se disponía de dos nuevos documentos: uno había sido recibido recientemente de la delegación de Hong Kong, China y contenía nuevas observaciones sobre las cuestiones relativas a la consignación en listas (JOB(04)/133); el otro había sido preparado por la Secretaría a petición del Comité, y contenía una lista de documentos que se habían publicado durante los debates sobre la revisión de las directrices para la consignación en listas (JOB(04)/97). La lista incluía, por orden cronológico, los documentos formales e informales presentados por los Miembros, el Presidente o la Secretaría durante el proceso de revisión. La semana pasada, la delegación de Hong Kong, China había presentado una comunicación. El Presidente recordó entonces que el Comité aún tenía ante sí varios otros documentos, en particular, dos comunicaciones del Brasil (JOB(03)/189) y JOB(04)/12) que contenían preguntas preliminares sobre varias ofertas iniciales, así como una comunicación de Hong Kong, China sobre preguntas relativas a la consignación en listas (JOB(04)/81), y observaciones sobre esas preguntas formuladas por el Taipei Chino (JOB(04)/82).

42. El representante de Hong Kong, China dijo que la nueva comunicación presentada por su delegación pretendía hacer avanzar los debates y señalar a la atención de los Miembros las posibles ambigüedades y dificultades que podían evitar al consignar nuevos compromisos. No tenía intención

de reabrir un debate sobre las Directrices para la consignación en listas, sino cerciorarse de que éstas seguían constituyendo la base para consignar los compromisos en las listas y promover un entendimiento común entre los Miembros sobre cómo se deberían aplicar. La víspera se habían debatido importantes cuestiones relativas a la consignación en listas en el Comité en Sesión Extraordinaria, donde las delegaciones examinaron un documento de Suiza relativo a la necesidad de transparencia y certeza jurídica de las listas. Muchos elementos del documento estaban relacionados con el trabajo en curso en este Comité. La nueva comunicación de Hong Kong, China tomaba en cuenta las observaciones formuladas por otras delegaciones. Esperaba que el debate sobre las cuestiones relativas a la consignación en listas siguiese dos caminos, siendo el primero el examen continuado de las cuestiones planteadas por su delegación y otras delegaciones, a saber, preguntas generales y horizontales relativas a la consignación en listas. Consideraba útil estructurar este debate conforme a las secciones de las Directrices para la consignación en listas. En segundo lugar, las pruebas de necesidades económicas eran una cuestión específica por derecho propio, dado que algunas cuestiones relacionadas con las PNE, aunque seguían incluidas en el mandato del Comité, podían ir más allá de la consignación en listas. Señaló que una nota de antecedentes elaborada por la Secretaría (S/CSS/W/118) proporcionaba una relación de pruebas de necesidades económicas consignadas en listas y contenía algunas observaciones interesantes que incitaban a la reflexión. La nota ayudaría a los Miembros a mantener un debate sustantivo sobre las PNE. Su delegación aportaría más ideas y reflexiones específicas en futuras reuniones.

43. La representante del Taipei Chino se mostró de acuerdo en que muchas cuestiones relativas a la consignación en listas exigían un entendimiento común sobre la aplicación de las Directrices para la consignación en listas. Comentando de manera preliminar el último documento de Hong Kong, China, dijo, con referencia a la pregunta 1, que debería realizarse una interpretación distinta de las anotaciones "ninguna" y "sin consolidar" en la sección correspondiente a los sectores específicos. Las opiniones del Grupo Especial en el asunto *México- Telecomunicaciones* podrían proporcionar claves para abordar problemas como los planteados en la pregunta 2. Podría ser beneficioso celebrar un debate ulterior sobre la pregunta 4, relativa a los compromisos adicionales, o la pregunta 5 referente a las pruebas de necesidades económicas.

44. La representante de Corea coincidió con Hong Kong, China en que no sería conveniente tratar de revisar las Directrices para la consignación en listas. En su lugar, las delegaciones deberían concentrarse en cómo aplicar debidamente las Directrices a las listas actuales. Con miras a preparar las ofertas revisadas, podría resultar útil debatir la inclusión de los elementos de transparencia en las listas que, estrictamente hablando, no estaban sujetos a la consignación en listas. También apoyó la celebración de un debate ulterior para aclarar el contenido de las pruebas de necesidades económicas y los tipos de criterios utilizados a este respecto.

45. El representante de Suiza dijo que la aclaración de los aspectos técnicos era sumamente importante a efectos de la preparación de las ofertas mejoradas para mayo de 2005. Con respecto a las preguntas de Hong Kong, China, su delegación compartía ampliamente las observaciones formuladas por el Taipei Chino sobre las preguntas 13 y 7 a 10. Suiza deseaba celebrar más debates sobre las preguntas 5 y 6. Para hacer avanzar los debates, propuso centrarse en las soluciones y no en los problemas, y apoyó la idea expresada por Hong Kong, China de seguir la estructura de las Directrices para la consignación en listas.

46. El representante de Tailandia apoyó un debate sobre las PNE, preferiblemente como punto separado del orden del día.

47. El representante de Filipinas consideró muy beneficioso examinar las preguntas formuladas por Hong Kong, China, y convino en que no tenía sentido reabrir un debate sobre las Directrices para la consignación en listas. No obstante, si determinados párrafos de las Directrices no eran lo

suficientemente claros, deberían ser abordadas con una mentalidad abierta. También apoyó un examen más centrado de las pruebas de necesidades económicas.

48. El representante de Hong Kong, China convino con Suiza en la necesidad de centrarse en la búsqueda de soluciones. Su delegación había distribuido un documento de sala que contenía preguntas sobre la consignación en listas en relación con la oferta inicial del Brasil. El objetivo era enmarcar esas preguntas en un contexto más específico. No pretendía ocuparse separadamente del Brasil, y el delegado de este país había aprobado de hecho este enfoque. Muchas de las preguntas formuladas se referían también a otras ofertas iniciales y los Miembros se beneficiarían del debate de las cuestiones horizontales y generales. Con respecto a la observación formulada por el representante de Filipinas, dijo que los problemas que se habían planteado no eran debidos al contenido de las Directrices para la consignación en listas, sino a la manera en que los Miembros se servían en la práctica de las Directrices.

49. El representante del Brasil dijo que algunas de las preguntas que había formulado su delegación a otras delegaciones habían sido abordadas en conversaciones bilaterales. Subrayó la necesidad de celebrar más debates con miras a promover la claridad, la comparabilidad y la certidumbre en las listas. Las preguntas de Hong Kong, China a su delegación habían llegado demasiado tarde para poder responder a ellas en esta reunión. No obstante, en relación con la pregunta 9, estaba en posición de confirmar que las palabras que faltaban habían sido omitidas por equivocación. Su delegación estaba preparando una nueva ronda de preguntas a los Estados Unidos, el Canadá, las CE, el Japón y Hong Kong, China para debatirlas en noviembre. El objetivo era aclarar en grado suficiente las cuestiones relacionadas con la clasificación y la consignación en listas en estas negociaciones, y esperaba que cuanto más cerca estuviera la fecha límite de mayo para la presentación de las ofertas revisadas, más progresos se realizarían. Si algunos Miembros tenían preocupaciones y dificultades para participar en un debate formal, esperaba que éste se pudiese celebrar en el modo informal, o al menos sobre una base bilateral.

50. El representante de Guatemala propuso que los Miembros que habían respondido de forma bilateral a las preguntas del Brasil compartieran estas respuestas con otros países.

51. El representante de Hong Kong, China celebró la disponibilidad del Brasil para debatir las cuestiones relativas a la consignación en listas, dado que ello contribuiría a la claridad de las ofertas y proporcionaría aportaciones útiles para la preparación de las ofertas revisadas. Esperaba con interés seguir trabajando en el CCE.

52. La representante de los Estados Unidos dijo que su delegación había respondido directamente al Brasil y que en adelante procedería de esa manera con respecto a cualquier pregunta adicional que se planteara. Si bien era apropiado examinar en el CCE las cuestiones más amplias relativas a la consignación en listas, el Comité no era el foro oportuno para formular preguntas específicas sobre las ofertas iniciales de los distintos Miembros.

53. El Presidente propuso que los Miembros tomaran nota de las declaraciones hechas y que el Comité reanudara el debate en la próxima reunión. Por su parte, él seguiría reflexionando sobre las observaciones relativas a la manera de realizar progresos en el marco de este punto del orden del día.

54. Así quedó acordado.

#### C. OTROS ASUNTOS

55. Dado que no se plantearon cuestiones con arreglo al punto Otros asuntos, de conformidad con la práctica de agrupar las reuniones de los órganos subsidiarios en fechas cercanas a las de las

reuniones del Consejo, el Presidente propuso que la siguiente reunión formal se celebrara conjuntamente con el próximo bloque de reuniones sobre servicios.

56. Así quedó acordado.

---